

## Prácticas asociativas en la región metropolitana de Buenos Aires

Aída Quintar\*

*En el siguiente artículo se establece un vínculo entre la aplicación de políticas de ajuste en Argentina y el surgimiento de prácticas asociativas originales en el terreno popular. El crecimiento de las desigualdades sociales y la pobreza fueron efecto de las recetas neoliberales que privilegiaban el control de las variables económicas, principalmente la inflación, por encima de la equidad. La participación ciudadana se acrecienta en la lucha por los derechos sociales. El artículo se enfoca a reflexionar sobre las potencialidades de los nuevos actores sociales que protagonizan esas luchas. En particular, se aborda el caso de las asambleas vecinales, los piqueteros, la consulta popular y los cacerolazos, cuyo principal problema es la posibilidad de dar continuidad a una forma de democracia participativa, lo que significaría extender los derechos ciudadanos a ámbitos de la vida cotidiana y redefinirlos para que ayuden a una ampliación de la democracia y la participación. Para ello, sería imprescindible extender los principios de libertad e igualdad a un número mayor de relaciones sociales, al ámbito de las demandas particulares de los diferentes grupos y sus identidades específicas (raza, género, clase, identidad sexual) y legitimar esta pluralidad.*

\* Investigadora-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. La autora agradece los comentarios y sugerencias realizadas por Adrián Gurza, Tomas Calello, Marcela Vio y Mariana Accinelli.

## Introducción

En América Latina la multiplicación de las prácticas asociativas durante las últimas décadas se combinó con la implementación de programas de ajuste económico inducida por los organismos financieros internacionales, por un lado, y con la reorientación del papel de los Estados nacionales por el otro. En Argentina, como consecuencia de esas nuevas políticas que privilegiaban la eficiencia económica por encima de la equidad y eximían al Estado de sus responsabilidades sociales, se produjo un fuerte crecimiento de las desigualdades sociales y la pobreza. En consonancia con esta situación, se comienza a imponer una visión asistencialista del asociativismo que procura establecer una clara demarcación entre la cuestión social y la cuestión política, con lo que esta última quedó restringida a las prácticas que se desarrollan en el marco de los partidos institucionalizados o del aparato del Estado. Más aun, en las propias denominaciones de "organizaciones no gubernamentales" u organizaciones del "tercer sector" prevalece esta intención. En contraste con estas perspectivas, también en la última década se detecta la confluencia de modalidades asociativas en una compleja trama institucional donde pueden percibirse indicios de una recuperación de la participación ciudadana en la lucha por los derechos sociales de los sectores crecientemente marginados por las políticas neoliberales. El objeto del presente artículo es aportar elementos para la reflexión sobre las potencialidades que tienen las diversas asociaciones que se vinculan a los problemas de pobreza o exclusión social y que tuvieron un papel muy activo en las últimas décadas.

## Modalidades asociativas en la región metropolitana del Gran Buenos Aires

En la compleja trama asociativa vinculada a la pobreza, que surge a partir de las hiperinflaciones con las que concluye la década del ochenta e inicia la del noventa, es posible identificar tanto prácticas colectivas que emergieron de la autorganización de sectores populares que interpelaban el orden vigente como también modalidades asociativas promovidas por organismos estatales que comienzan a implementar políticas focalizadas para atenuar las tensiones que amenazaban la gobernabilidad del sistema. Es decir que la configuración de esa trama asociativa es la resultante de un entrelazamiento de prácticas de resistencia e impugnación pero también de comportamientos de clientelismo y sumisión a las estructuras del poder institucionalizado.

El espacio privilegiado por esas prácticas colectivas es el barrio<sup>1</sup>, donde conviven grupos compuestos por los vecinos y por asociaciones mixtas en las que actúan voluntarios externos y vecinos, muchos de ellos radicados fuera del ámbito barrial. Estas asociaciones están conformadas por personas que comparten una misma problemática, si bien debido al propio dinamismo de sus trayectorias muchas de ellas tienden a ir sumando otras temáticas a las que les dieran su origen. Son instituciones que brindan servicios asociados a las problemáticas de salud, educación, alimentación, violencia familiar, etc., que pueden incorporar otras organizaciones —generalmente externas al barrio— y que aportan alguna especialidad técnica en algún área determinada; entre ellas abundan diversos tipos de organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos descentralizados de la administración pública, escuelas, parroquias y universidades, entre otras.

Hacia fines de los ochenta, en un marco de creciente exclusión social, comienzan a desarrollarse prácticas colectivas y solidarias de gestión de la sobrevivencia cotidiana. Un ejemplo de ello fueron las "ollas populares" que, con motivo de la hiperinflación de 1989, se comienzan a expandir en diversas zonas del país, en particular en aquellas áreas tradicionalmente industriales que fueron desmanteladas durante la dictadura militar dejando una gran secuela de población desocupada. Este es el caso de la región metropolitana el Gran Buenos Aires (RMBA), donde habita un tercio de la población nacional y donde una amplia franja se distribuye entre pobres e indigentes. Esas ollas populares fueron, en general, el inicio de organizaciones populares autoconvocadas que orientaron su acción hacia la búsqueda de formas de resolución colectiva a sus carencias. En efecto, pasados los primeros tiempos de la crisis, cuando la acción era más espontánea y desordenada, comienzan a desarrollarse diversas asociaciones comunitarias que buscan establecer lazos de contención solidaria para enfrentar la subsistencia cotidiana.

En esos años también comienzan a proliferar programas sociales compensatorios, financiados por organismos internacionales de desarrollo (principalmente el Banco Mundial), a través de los cuales los gobiernos nacional y provincial pretenden paliar los efectos de precarización derivados de las políticas de ajuste. Con el objeto de implementar estos programas se estimula la participación y la creación de ONG para que actúen como mediadores entre la dirección de esos programas y los diversos segmentos de beneficiarios, con lo que creció el número de asociaciones orientadas a grupos poblacionales que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad social. En ese gran conjunto de asociaciones vinculadas a los problemas de supervivencia de grupos sociales empobrecidos y excluidos están básicamente los que orientan su acción a la asistencia y

<sup>1</sup> El barrio es el equivalente a lo que en México se conoce con el nombre de colonia.

a la contención familiar de la población marginada, en particular la de sus miembros más vulnerables.

Estas asociaciones autoconvocadas o nucleadas alrededor de instituciones sociales (un gran número de ellas vinculadas al ámbito religioso) se orientaron a asistir en aspectos específicos a la población carenciada. Así, junto con la autoorganización asociativa surgen otras organizaciones, como las ONG dedicadas al cuidado y la alimentación de los niños de madres jefas de hogar que estaban obligadas a trabajar y no tenían con quién dejar a su hijo, o al establecimiento de centros comunitarios para la atención de los ancianos y de las familias con situaciones de alta vulnerabilidad social. Gran parte de estas asociaciones son financiadas por los programas sociales focalizados que se implementan desde el aparato del Estado, los bancos multilaterales de desarrollo y las fundaciones y ONG internacionales.

Otras organizaciones del Gran Buenos Aires tienen un origen anterior, ya que surgen a comienzos de la década de los ochenta como corolario del proceso de toma de tierras y formación de los asentamientos. La principal demanda de esas asociaciones era el reclamo por la legalización de tierras ocupadas con fines habitacionales. Los primeros casos registrados de ocupación colectiva de tierras que conforman los llamados "asentamientos" tuvieron lugar en 1981 en la localidad de Quilmes, ubicada en el sur del Gran Buenos Aires<sup>2</sup>, modalidad que se reproduce hasta la fecha.

La población que ocupa estos asentamientos está compuesta por migrantes de ámbitos urbanos y la movilización de las asociaciones vinculadas tiene por objetivo la lucha por la obtención de la legalidad de las tierras con intermediación del Estado para el logro de todo tipo de mejoras. Transcurrida la primera etapa de ocupación de las tierras y conformación del asentamiento, durante la cual se registra una significativa movilización de los vecinos y un alto grado de organización (en la que desempeñan un importante papel las comunidades eclesiales y militantes políticos de base, provenientes de la izquierda y del peronismo), gran parte de esas asociaciones desemboca en formas de asociación barrial más tradicional en las que se observa baja movilización y mayor desarticulación organizativa (Cravino, 1999).

La población de estos asentamientos, que a diferencia de la que habita en las villas de emergencia<sup>3</sup> vive su condición habitacional como definitiva, se preocupa por disponer de trazados urbanos más regulados (subdivisión de lotes, construcción de calles

<sup>2</sup> Cristina Cravino (1999) señala que de los 10 millones de personas que viven en la zona conurbada de Buenos Aires, aproximadamente 5 % se asienta en tierras cuya situación jurídico dominial es irregular.

<sup>3</sup> Las llamadas villas de emergencia se formaron aproximadamente en las décadas de los treinta y cuarenta, y se caracterizan por encontrarse próximas a los centros de la ciudad, esto es, en centros de producción y consumo donde las tierras son escasas y su precio es alto. Gran parte de las villas se asentaron en tierras de propiedad fiscal y las tramas urbanas que

y espacios comunes). De ahí que tras haber consolidado su condición de ocupantes, la tarea principal que encararon esas asociaciones fue realizar proyectos de infraestructura tales como pavimentación e iluminación de las calles del barrio, mejoramiento de la seguridad, construcción de salas de primeros auxilios, transporte colectivo, clubes de fútbol y otras formas de esparcimiento, etc. De manera paulatina, gran parte de este conjunto asociativo pasó a engrosar las filas de las tradicionales sociedades de fomento<sup>4</sup>, que desde comienzos de 1900 se venían ocupando de los problemas de infraestructura de servicios comunitarios del barrio.

Entre las diversas modalidades asociativas vinculadas a una población en situación de alta vulnerabilidad social encontramos aquellas asociaciones conformadas por jóvenes que tienen el objeto de promover la extensión de los espacios culturales a una población crecientemente marginalizada del trabajo y la educación. De este conjunto destacan aquellas asociaciones que buscan crear espacios político-culturales alternativos, poniendo su énfasis en recrear formas de comunicación más democráticas que las ofrecidas por los medios masivos de comunicación (asociaciones de radios comunitarias, de video alternativo, etc.) constituyéndose en espacios para la discusión y la libre expresión de las comunidades en las que se insertan.

Los agentes que con sus prácticas fueron conformando las diversas modalidades asociativas mencionadas configuran un amplio y heterogéneo espectro en el que encontramos desde poblaciones directamente afectadas por la marginación económica y social (falta de tierra y vivienda, falta de trabajo, precariedad en sus condiciones de vida, etc.) hasta militantes sociales y profesionales que no forman parte de la comunidad afectada pero que están interesados en apoyar o asistir esa comunidad.

En relación con su conformación sociodemográfica, sobresalen dos aspectos principales: que en su gran mayoría se trata de personas en edad activa (20 a 59 años), las mismas edades de los que en épocas anteriores conformaban la militancia sindical y los partidos políticos, y que hay una importante participación de las mujeres en estas prácticas colectivas, en particular en aquellas vinculadas a asistir a población sometida a condiciones de alta vulnerabilidad social. Esta mayor participación femenina si bien obedece en parte al carácter doméstico de las reivindicaciones hechas por estas asociaciones, también obedece a la conducta de aislamiento defensivo inicial de una gran

---

forman son de características irregulares. Generalmente se encuentran vinculadas a los movimientos migratorios provenientes del campo a la ciudad, es decir, su población tiene una experiencia predominantemente rural. Son tomas individuales/familiares; mas el posterior crecimiento se produce a través de sucesivas incorporaciones basadas en redes sociales y familiares (Cravino, 1999).

<sup>4</sup> Las sociedades de fomento, que venían creándose desde principios de siglo, tuvieron un importante papel en el Gran Buenos Aires a partir de los años cuarenta, orientando su tarea a la resolución de los problemas de infraestructura urbana

población masculina afectada por el fenómeno de la desocupación. En efecto, esta situación comienza a cambiar en los últimos años de los noventa cuando comienzan a organizarse diversos movimientos de trabajadores desocupados que van confluyendo en el movimiento piquetero.

Con referencia a quiénes son los miembros que más influyen en la organización interna de las asociaciones, de dónde provienen y qué espacios ocupan en esas organizaciones, si bien existe una diversidad de situaciones intermedias, es posible diferenciar dos situaciones contrapuestas. En las del primer tipo se ubicarían aquellas asociaciones en las que los miembros activos no están directamente afectados por la problemática que los convoca, sino que asumen como compromiso militante o profesional la tarea de asistir en problemas específicos a una determinada comunidad. Generalmente son voluntarios provenientes de la militancia social, religiosa o de pequeños partidos de izquierda y profesionales que desarrollan una práctica solidaria de apoyo como organizadores del conjunto afectado y gestores de las demandas de ese conjunto. En este segundo tipo, la diversidad de situaciones obliga a diferenciar entre aquellas organizaciones que por su origen contestatario funcionan como activistas que interpelan al sistema y aquellas otras, entre las que encontramos muchas de las clásicas ONG, cuya función es principalmente la de administrar con cierta eficiencia los fondos destinados a la implementación de políticas compensatorias focalizadas, cumpliendo un papel asistencialista y de mediación funcional entre los demandantes y los aparatos de gobierno.

Esta diferenciación puede resultar importante si se intenta ahondar en las potencialidades que presentan estas formas organizativas para ir más allá de la reivindicación inmediata que inicialmente los convoca. Cuando no son los propios afectados los que se auto-organizan para gestionar sus demandas, lo que se suele generar es una relación de dependencia con los miembros activos no afectados que actúan como organizadores. En esa situación, los afectados delegan en aquellos miembros activos la resolución de sus carencias reforzando con su actitud un sentimiento de creciente impotencia para asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de sus demandas. Así, la capacidad de los no afectados se reduce a ser meros receptores de asistencia "humanitaria" sin sentir que sus demandas tienen legitimidad por ser derechos de ciudadanía. En este tipo de asociaciones suele prevalecer un tipo de organización interna que, en parte, reproduce las relaciones verticales que se dan en los organismos de mediación más tradicionales.

---

y de servicios creados por la rápida urbanización generada a partir de la llegada masiva de migrantes internos que venían a trabajar en la industria naciente. Con la creación de los consejos de la comunidad que impulsara la renovación peronista bonaerense en los años ochenta y la aparición de otras formas asociativas, como las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de fomento fueron perdiendo el protagonismo que tuvieron como mediadores frente al Estado, lo mismo a nivel municipal que provincial.

En efecto, los miembros no afectados son quienes ocupan los espacios de coordinación y decisión de la asociación mientras que la comunidad externa tiene muy baja participación y capacidad de movilización propia. Estas características organizativas limitan la potencialidad de las prácticas colectivas de la asociación para crear nuevas formas de expresión política. De hecho, las prácticas generalmente responden a la necesidad de satisfacer en forma inmediata carencias en las condiciones de vida sin que esa instancia de asistencia se amplíe a demandas más complejas que involucren nuevas formas de participación ciudadana. En algunos casos, el asistencialismo se combina con una situación de clientelismo político cuando la distribución de bienes de primera necesidad o de determinadas sumas de dinero se otorga a cambio de una lealtad política que se materializa en el voto o en la concurrencia a los actos partidarios de los "punteros" o jefes barriales que los proveen.

En el polo opuesto están aquellas asociaciones en que las prácticas colectivas surgen de una autoconvocatoria de los propios afectados, siendo ellos mismos quienes conforman el conjunto de miembros activos que ocupan los espacios de coordinación y decisión. En esa situación encontramos a gran parte de las asociaciones que llevaron (y siguen llevando) adelante las ocupaciones de tierras, lo que no descarta la posibilidad de que en dichas organizaciones también puedan participar otros sectores no directamente afectados, que por su entrenamiento profesional o su militancia social pueden aportar al grupo original ciertas capacidades en tareas de gestión de proyectos, legal, etc.). También en las asociaciones que impulsan la creación de espacios culturales y donde los sujetos que las conforman son principalmente jóvenes con cierto nivel de escolaridad se aprecia que todos los miembros participan de manera activa. Este tipo de organizaciones brinda la posibilidad de desplegar un proceso de aprendizaje en términos de lucha por la conquista de derechos que permitirá adquirir crecientes niveles de participación en procesos de toma de decisión y de expansión de sus intereses y demandas, vinculándolas en una perspectiva de participación política más amplia. Sin embargo, es importante enfatizar que la diferencia en el origen de estas asociaciones determina los objetivos planteados en el curso de su trayectoria. En este sentido, si bien en algunos casos esos objetivos no dejaron de ser una respuesta coyuntural a una demanda específica, en otros hubo una ampliación y complejización de los mismos que implicaron transformaciones cualitativas de las asociaciones a partir de su articulación con otras instancias organizativas.

Uno de los casos más interesantes en términos de las transformaciones que se producen en la trayectoria de las asociaciones se encuentra en el caso de aquellas que se vinculan con la lucha por la tierra y la vivienda. Ya se mencionó que, una vez transcurrida la primera etapa de ocupación de las tierras y conformación del asentamiento

—en la que se registra una alta movilización y organización de los vecinos—, muchas de esas organizaciones desembocan en formas de asociación barrial más tradicional dedicadas a llevar adelante proyectos de infraestructura del barrio, organizando en algunos casos centros de asistencia familiar y aprovechando programas sociales orientados a la niñez, a la mujer embarazada, a los jefes/jefas de hogar desocupados, etc. Sin embargo, en los últimos años algunos asentamientos fueron confluyendo junto a otras instancias organizativas en la constitución de la Federación de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat—Central de Trabajadores Argentinos (FTV-CTA). Tal como lo menciona Cravino:

Esta organización no tiene una identificación exclusiva con el movimiento villero ni tampoco una adscripción territorial circunscripta a la Ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, pretende ser abarcativa de todo el país e intenta agrupar toda una serie de reivindicaciones en cuanto a los que ocupan tierra fiscal o privada, las villas, los que tienen dificultades con créditos estatales para la vivienda, los pequeños productores (por lo general endeudados), indígenas (que tienen dificultades para acceder a tierra propia) o cuestiones ambientales (Cravino, 1999).

Resulta clara la diferencia entre las primeras reivindicaciones más instrumentales sobre las tierras ocupadas que planteaban las asociaciones de ocupación, legalización de tierra y vivienda, y la discusión política acerca del problema de la tierra y la vivienda que plantea la FTV-CTA como parte de un cuestionamiento más general del modelo económico y político vigente. A su vez, como esta federación surge asociada a la CTA y como uno de los problemas más acuciantes que siguen teniendo los pobladores de los asentamientos es el de la falta de trabajo, surge en ese sector una importante fracción del movimiento piquetero cuyo líder, Luis D'Elia (de la FTV-CTA), afirma: "El fin último nuestro no es tener la tierra ni la vivienda aisladamente, es construir el movimiento popular para cambiar las condiciones de poder en la región" (Rauber, 2001).

### **Nuevas formas de participación ciudadana: las asambleas de vecinos autoconvocados**

En estos últimos años, el cuestionamiento popular a los canales de representación no surgió sólo de los partidos políticos, sino también de los sindicatos tradicionales agru-

pados en torno a la Confederación General de Trabajo (CGT). Expresión de ese cuestionamiento fue la conformación de una nueva central sindical: la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la cual se propuso ser un organismo de mediación y representación del conjunto de la población de trabajadores con o sin ocupación, es decir, incluye en su seno a los desocupados, que constituyen más de 23 % de la población económicamente activa (Indec, 2002). A diferencia de la tradicional CGT, esta central desarrolla una concepción y una práctica política que la aleja de las modalidades corporativas del viejo sindicalismo. En efecto, por sus permanentes intentos de articulación con organismos de derechos humanos y otras formas asociativas vinculadas a la problemática de los derechos sociales, la CTA podría ser definida más como un movimiento social que como un organismo sindical. En el año 2000 esta central, junto con diversos organismos sociales y políticos no partidarios, conformó un Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo), a partir del cual convocó a una consulta popular, con el objeto de presionar al gobierno a establecer un seguro de empleo y formación<sup>5</sup>. Si se toma en cuenta que a sólo dos meses del repudio masivo a la propuesta electoral realizada con motivo del recambio de miembros del poder legislativo —que se expresó en un altísimo número de votos en blanco o anulados— la consulta popular, desarrollada entre el 13 y el 15 de diciembre de 2001, logró juntar más de tres millones de votos<sup>6</sup>; su valoración es mayor aún dado que prácticamente no contó con publicidad ni apoyo de los medios y menos aún del gobierno o de los partidos políticos tradicionales. A los pocos días de esa consulta popular, el 19 de diciembre se produce la autoconvocatoria del "cacerolazo", en el que confluieron millares de personas que desde diversos puntos de la ciudad se fueron reuniendo en la Plaza del Congreso y en la Plaza de Mayo para pedir la renuncia del presidente y del ministro de economía. Esta multitudinaria autoconvocatoria, que se organizó sin líderes ni organizadores partidarios, fue una contestación colectiva a la declaración del estado de sitio que realizara el entonces presidente de la nación intentando reprimir así la protesta social. El "cacerolazo" se fue reproduciendo con algunas variantes en casi todas las ciudades del país a pesar de la fuerte represión policial (varias

<sup>5</sup> La propuesta del Frenapo es la de un seguro de empleo y formación de 380 pesos para las jefas y los jefes de hogares que están desocupados, además de un pago adicional de 60 pesos por hijo menor y de 150 en el caso de personas mayores de 65 años (advertimos que los valores mencionados eran aún equivalentes a dólares por la vigencia de la convertibilidad cuando se planteó ese plan). En la propuesta también se especificaba el modo de financiar dicho seguro sin tener que recurrir a préstamos adicionales, sino sólo haciendo cumplir la ley de recaudación fiscal para los grandes grupos económicos y el sector financiero, entre otros.

<sup>6</sup> Más de tres millones de personas se pronunciaron con su voto a favor de la iniciativa del Frenapo de crear un salario de ciudadanía para enfrentar la desocupación, la pobreza y la recesión económica (Diario Página 12, Argentina, diciembre de 2001).

decenas de muertos y cientos de heridos). En esas movilizaciones lo que se manifiesta es un repudio masivo de la ciudadanía contra los funcionarios de gobierno y las formas de ejercer la práctica política en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, al tiempo que contra el modelo de organización social planteado por el programa neoliberal.

A pocos meses de aquellos acontecimientos resulta aún difícil hacer una evaluación sobre el peso que tienen las nuevas formas de movilización y participación en el conjunto. Sin embargo, es posible apreciar que aquella jornada de diciembre no quedó fijada como un hecho aislado sino que, por el contrario, parecería haber sido el inicio de un nuevo tiempo de participación ciudadana. En efecto, a partir de aquel acto colectivo inaugural comenzaron a organizarse en la ciudad de Buenos Aires, primero, y en el Gran Buenos Aires y resto del país, después, asambleas de vecinos organizadas por barrios y articuladas entre sí por diversas formas organizativas. En la RMBA existe una asamblea interbarrial que se reúne todos los domingos en Parque Centenario, que es una plaza pública situada en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que en un creciente proceso de articulación de las asambleas no sólo a nivel de una ciudad o de una región sino a nivel nacional, el domingo 17 de marzo (anterior a la conmemoración de los 26 años de consumado el golpe militar del 24 de marzo de 1976) lograron reunirse en la Interbarrial de Parque Centenario más de 150 asambleas de diversas ciudades del país, dejando planteadas formas de coordinar actividades a nivel nacional y la cita para un nuevo encuentro en mayo. A su vez resulta relevante señalar que en la marcha en conmemoración de la asunción de la dictadura militar, que se realiza todos los años en todas las ciudades del país, por primera vez gran parte de los asistentes concurrieron en forma masiva a dichas concentraciones encolumnados tras las banderas de las diversas asambleas barriales autoconvocadas, articulando su presencia, a su vez, con otras formas organizativas como la de los movimientos de derechos humanos (madres y abuelas de Plaza de Mayo, Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio –HIJOS–, Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–, la del Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ–, etc.), la del movimiento de desocupados agrupados en las organizaciones de piqueteros, la de los centros de estudiantes, las organizaciones vinculadas a la Central de Trabajadores Argentinos –CTA–, entre otras.

Las asambleas barriales autoconvocadas expresan una modalidad de movilización y participación de la ciudadanía que reafirma la crisis de representatividad de las formas tradicionales de mediación y representación social y pone en cuestión al propio modelo de "democracia representativa". Una de las conquistas más interesantes de estas asambleas es la recuperación del espacio público como foro de debate. En efecto, las asambleas se realizan en los cruces de calles y avenidas y en las plazas y parques públicos. En esa experiencia también se puede apreciar la confluencia de una diversidad

de perfiles socio-culturales entre los barrios y en cada barrio mismo. A estas asambleas asisten semanalmente unas cien personas y lo que se puede apreciar en sus debates es la poca experiencia que tienen sus miembros en este tipo de práctica asambleísta y la voluntad por realizar un aprendizaje colectivo, aprovechando, en muchos casos, formas organizativas preexistentes.

Entre los interrogantes que suscitan estas nuevas modalidades organizativas, uno muy difundido es el que se pregunta sobre la eficacia que pueden tener las asambleas barriales como órganos resolutorios. A su vez, también cabe preguntarse si dada la amplia diversidad de situaciones y la novedad que engloban estas experiencias colectivas resulta relevante poner el acento en la evaluación de su eficacia resolutoria. ¿Del despliegue de estas modalidades organizativas surgirán nuevas formas de pensar-hacer política y nuevas formas de representación que revaloricen la participación democrática de los ciudadanos?

Si bien no existe aún, entre los analistas sociopolíticos, un claro consenso sobre los alcances y las limitaciones de estas nuevas modalidades lo inédito de la experiencia de estas asambleas vecinales autoconvocadas es la de plantearse una participación ciudadana que pretende ser, a su vez, una práctica colectiva de democracia directa y una práctica refundadora de una nueva forma de pensar y hacer política. Es decir, no se trata de un cuestionamiento a la democracia sino a lo que favoreció el creciente déficit de democracia en nuestro país y que se encarna en el comportamiento corporativo de los partidos políticos y en el contubernio que dicha corporación mantiene con los lobbies de los grandes conglomerados económicos.

## Reflexiones finales

Con la recuperación del estado de derecho a finales de 1983 vuelven a la escena pública los partidos políticos y los sindicatos que estuvieron proscritos durante la dictadura militar y gran parte de la movilización social que se había desarrollado en aquellos años reencauza sus prácticas a través de estos canales institucionalizados. En ese periodo de transición hacia la democracia cobra relevancia el discurso sobre la participación ciudadana totalmente reprimida durante los años de gobierno militar. Sin embargo, la percepción de que la democracia reconquistada es remitida exclusivamente a un plano meramente procedimental de la política, sin pretensiones de producir una transformación social, va convirtiendo al ciudadano en un simple votante sólo necesario para legitimar un proceso electoral en el que cada vez se restringen más las opciones. En ese

marco, el vertiginoso crecimiento de la pobreza, resultante de las estrategias neoliberales adoptada por los gobiernos constitucionales, no encuentra en los partidos políticos tradicionales un canal para plantear propuestas alternativas a las políticas de exclusión de los derechos sociales que afectan a la mayoría de la población. Esa carencia promueve una renovada ola de protestas sociales que se organizan al margen de los canales político-partidarios y sindicales, a pesar de no estar ya proscriptos como lo estuvieron durante la dictadura militar.

Las nuevas prácticas asociativas que surgen no responden a vínculos institucionales definidos y trazan un nuevo escenario en el cual la preocupación por lo social aparece escindida de la cuestión política. Así, mientras que lo político queda cada vez más relegado a la burocracia partidocrática y funcionarial, son las asociaciones civiles territoriales y las organizaciones no gubernamentales, entre otras, las que se van constituyendo como los nuevos actores que problematizan lo social. Este fenómeno incide en la creciente renuencia a entender la participación ciudadana como participación política y a restringir sus prácticas a reivindicaciones coyunturales y sectoriales.

No obstante, en los últimos tiempos comienzan a vislumbrarse algunos cambios. Tal el caso de las organizaciones populares ligadas al fenómeno de desocupación creciente que surgen a mediados de los años noventa con los "cortes de ruta". Esas movilizaciones de piqueteros, que fueron teniendo mayor presencia en todo el país, llegaron a ocupar el principal espacio de la protesta durante la mayor parte del presente año. La conformación de la Central de Trabajadores Argentinos, que incluye no sólo gremios de trabajadores ocupados sino también movimientos de desocupados y otras organizaciones sociales vinculadas a la problemática de los derechos sociales crecientemente vulnerados por la política económica vigente, es otra manifestación de la búsqueda de nuevas formas de participación. Pero quizás el hecho más relevante de los últimos tiempos lo constituyan las prácticas políticas colectivas que surgen como principal modalidad ciudadana a partir del llamado "cacerolazo" del 19 de diciembre de 2001 que puso fin a la presidencia de De la Rúa. Las asambleas, a diferencia de las asociaciones, no rechazan la política sino un modo de hacer política: la de los partidos (sean de derecha o de izquierda) y rompen con esa idea liberal de diferenciar el ámbito social del político. Por eso en esas asambleas se habla de los problemas de la gente del barrio, pero también se discute el presupuesto nacional o la actitud del gobierno respecto a su política internacional (como responder o no a las demandas del imperio americano en relación con mandar soldados argentinos a Colombia) o al Fondo Monetario Internacional, que pretende imponer nuestra política económica.

Ante la evidente crisis de representatividad de los dirigentes políticos, las asambleas se están transformando en un foro de debate público que discute tanto el tipo de

democracia que desean como la aptitud y las carencias o distorsiones de las instituciones políticas existentes: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Poder Ejecutivo y las posibles modalidades de sustitución o reestructuración de esas instituciones públicas. Parecería que amplios sectores de la ciudadanía han ido tomando conciencia de que no sólo las corporaciones del capital multinacional tienen poder, sino que la sociedad también tiene poder para discutir las nuevas formas de la política y para recrear los antiguos lazos de solidaridad rotos por las políticas de ajuste neoliberal en las últimas décadas.

La presencia de una multiplicidad de concepciones y perspectivas que conviven en las asambleas hace que no sean pocas las dificultades que enfrentan, lo que vuelve impredecible el rumbo que en el futuro recorrerán estas prácticas colectivas. ¿Cabe hablar de sociedad civil en el caso de estas experiencias? Este es claramente un punto que requiere ser profundizado a medida que avance la experiencia concreta y, al respecto, una interrogante que surge es la que asocia estas nuevas experiencias con las prácticas asociativas que se expandieron en el país durante los noventa. ¿Cómo repercutirá este proceso de democratización que se viene desarrollando en las asambleas vecinales sobre las prácticas colectivas de las asociaciones territoriales y las ONG de la RMBA? ¿Se pueden considerar las nuevas modalidades de prácticas políticas colectivas como una profundización de la participación de la sociedad civil a través de las experiencias asociativas vinculadas a la lucha por los derechos sociales y contra la desigualdad y exclusión social?

Finalmente, cabe preguntarse si esta reapropiación y resignificación del espacio público que se viene produciendo en los últimos meses con la confluencia de movimientos como el de los piqueteros, la consulta popular, los cacerolazos y las asambleas de vecinos autoconvocados, es el germen de una nueva forma de participación ciudadana que busca superar las profundas deficiencias democráticas a las que condujo un modelo de política económica, social y cultural basado en la creciente degradación y marginación de los derechos sociales de las amplias mayorías. Superar esas deficiencias democráticas quizás implica poner en el foro de debate desde la noción de derechos sociales y ciudadanía hasta la propia concepción de lo que se considera política democrática y participación ciudadana, pasando por una profunda revisión de los conceptos de "representado" y "representante". Quizás el desafío de esta nueva etapa para las ciencias políticas y sociales sea el de poder abrirse al debate acerca de estas nuevas formas de prácticas democráticas que, con diversas variantes, están comenzando a manifestarse en gran parte de nuestro continente americano.

## Bibliografía

- Beccaria, L. Quintar, A. (1991), *Cambios en la estructura distributiva 1975-1990*, Buenos Aires, Unicef.
- (1995), "Reconversión productiva y mercado de trabajo. Reflexiones a partir de la experiencia de Somisa", en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, México, vol.34, núm. 139, octubre-diciembre.
- Cravino, M.C. (1999), "Los asentamientos del Gran Buenos Aires. Reivindicaciones y contradicciones", en Neufeld, M. R., M. Grimberg, S. Tiscornia y S. Wallace, [comps.], *Antropología social y política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*, Buenos Aires, Editorial Eudeba.
- Gonzalez Bombal, I. (1995) "¿Entre el Estado y el mercado? ONGs y sociedad civil en la Argentina", en Thompson, A., *Público y privado*, Buenos Aires, Editorial Losada.
- Grillo, O. (1995), "Las asociaciones vecinales en Buenos Aires. Restricciones sistemáticas y experiencias concretas", en Thompson, A., *Público y privado*, Buenos Aires, Editorial Losada.
- Nun, J. (2000), *Democracia. ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Quintar, A. (1990), "Flexibilidad laboral. ¿Requerimiento de las nuevas tecnologías o fragmentación del movimiento obrero?", en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, núm. 118, Vol.30, julio-septiembre.
- y A. Argumedo (2000), "Argentina: os dilemas da democracia restringida" en *Lua Nova. Revista de Cultura e Política*, São Paulo, CEDEC, núm. 49.
- Rauber, I. (2001), "La cta y la lucha piquetera", en dirección electrónica: [www.piketetes.com.ar](http://www.piketetes.com.ar)